

Editorial

Organismos internacionales, gobiernos y partidos políticos han demostrado, en los últimos años, una marcada preocupación por los 'ajustes sociales'. Parecería, desde esta perspectiva, que la preocupación por lo económico ha ido dando paso a la preocupación por lo social.

Esto pone en evidencia por lo menos tres cuestiones. La primera es la primacía de lo económico, entendido como libre mercado; la segunda, la primacía de lo social; y la tercera cuestión, como conclusión lógica de las dos primeras, está centrada en una comprensión radicalmente dual de la realidad: se comprende lo económico como separado de lo social, o lo social como separado de lo económico, cuando en rigor, lo económico es eminentemente social y lo social tiene una dimensión eminentemente económica.

El panorama descrito suscita una serie de inquietudes de cara a nuestra realidad nacional ¿Qué es lo que está realmente en juego en nuestro país? De las cuestiones señaladas al inicio, cuáles se están acentuando? Estas cuestiones ¿responden a lo que está en juego en la vida nacional? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué intereses se están defendiendo? ¿Cuáles son los grupos que, de alguna manera están enfrentados?

Sin duda, uno de los puntos en que debe centrarse nuestra atención es la reducción de la pobreza en la que está sumida la mayoría de la población salvadoreña. Según el economista Edgar Lara, casi el 50% de la población salvadoreña vive con 2 dólares al día, y casi el 20% vive con menos de 1 dólar. Entonces lo que está en juego en la vida nacional es, precisamente, encontrar mecanismos que no solamente 'den respiro' a la población, sino que, efectivamente, vaya sacándola de la pobreza.

En una primera aproximación al problema, se tiene la impresión de que existe la voluntad de encararlo. Por ello, cabría preguntarse si, además de la voluntad, las propuestas han sido efectivas. La respuesta, sin lugar a dudas, es negativa: la pobreza no sólo no ha disminuido, sino que se ha profundizado en los últimos tiempos.

La historia reciente nos ha enseñado que para superar la pobreza no es suficiente la libertad del mercado. Quizá ha sido precisamente en nuestro país donde se ha puesto de manifiesto con mayor claridad, que la teoría del rebalse es un mito. Nadie podría negar que a las empresas se les ha dado una serie de prerrogativas; por ejemplo, en el pago de los impuestos o en

el cumplimiento de la legislación laboral, esta última, cada vez más favorable a los intereses patronales.

La justificación de esas prerrogativas fue que la prosperidad de las empresas beneficiaría a la sociedad en su totalidad, más allá de los sacrificios que ella implicara tanto para los trabajadores como para los empresarios. Ello llevaba implícita la necesidad de permitir el desarrollo de sus dinamismos intrínsecos sin interferirlos, y con ello, el progresivo retiro del estado -y con ello, de los mecanismos de control- de la vida económica. La prosperidad empresarial se miraba sólo desde la pura racionalidad económica: la prosperidad empresarial se convirtió una *conditio sine qua non* para la prosperidad de la sociedad.

Hoy sabemos que no ha sido así y tenemos una dura experiencia de ello. Las empresas se han beneficiado, unas más que otras. Pero ese beneficio no se ha traducido en bienestar para la sociedad. La situación social y económica de la mayoría de las personas se ha agravado y es cada vez más evidente.

Entonces, cabe preguntarse qué hacer si el modelo económico vigente no ha dado resultados, cómo debemos seguir procediendo. En la respuesta coinciden tanto las propuestas que vienen desde la izquierda política como de la derecha: es necesario retomar lo que antes se dejó de lado: la inversión social.

Una de las preocupaciones centrales de la actual administración ha sido, precisamente, la inversión social, que ha obligado a publicitados replanteos. Sin embargo, son muchas las dudas que suscitan dichos replanteos. Una de estas dudas es la pregunta acerca de su viabilidad: si se quiere 'responder responsablemente' a la situación de la población, es necesario preguntarse por la viabilidad de las distintas medidas que se han tomado en el área de la inversión social. Para responder a ello nada mejor que retomar algunas medidas que ya se han implementado y otras que se ha anunciado se van implementar.

Primeramente la *red solidaria*. No está en cuestión si le sirven o no los 20 dólares que se le proporcionan mensualmente a una familia de bajos recursos económicos. Cabe preguntarse, sin embargo, si esa ayuda va construyendo las condiciones para que las familias que reciben esta ayuda puedan hacer frente a sus necesidades cuando se suspenda. Si la respuesta es negativa, hay que concluir que aquella medida ha fracasado.

Luego, la inversión en educación. No está en cuestión si la inversión en educación es una necesidad de primer orden. Más bien, lo que está en cuestión es el modo como se pretende invertir en esta área. Es necesario

preguntarse, por ejemplo, si la exoneración del pago de aranceles a los jóvenes que están terminando su bachillerato los saca de su pobreza y provoca las condiciones para que continúen sus estudios universitarios. La realidad nos dice que no: muchos de los jóvenes que terminan el bachillerato, al tener que asumir las responsabilidades económicas de una familia, frecuentemente numerosa, ven muy lejana la posibilidad real de continuar estudiando. Es decir: consideran que si en el presente no tienen las posibilidades reales para proyectar su vida educativa, la educación universitaria no contará entre sus posibilidades reales. Por lo tanto el modo como se ha venido invirtiendo en educación no ha sido adecuado.

Con respecto a la inversión en salud, es necesario preguntarse en qué se ha invertido. No pretendemos cuestionar la transparencia de esa inversión. Sin embargo, el ISSS sigue siendo una institución deficitaria y el acceso a la salud es algo cada vez más ineficiente y lejano para la mayoría de la población. La inversión en salud tampoco ha solucionado el problema.

Por lo tanto, el énfasis que se está poniendo en la inversión social tampoco nos va sacar de la pobreza; más aún, tenderá a agudizarla. Cabe preguntarse de dónde saldrán los fondos para el financiamiento de las 19 medidas anunciadas por presidente de la República denominadas 'Alianza por la familia', que significarán un gasto por parte del Estado de 53.5 millones de dólares. La respuesta parece ser siempre la misma: recurriendo a los préstamos externos. Se trata de una deuda que en algún momento habrá que pagar. Para el año 2011 se tendrán que desembolsar en pago de la deuda alrededor de 2.900 millones de dólares. Sin duda, el endeudamiento es el modo más apropiado de ir postergando la crisis y se sigue recurriendo a ello, aunque dicha postergación se haga cada vez más insostenible.

Este marcado interés por la inversión social suscita muchas inquietudes y preguntas. ¿Por qué se tuvo que esperar tanto para comenzar a ver lo urgente que es hacerse cargo de la realidad social? ¿Por qué no se comenzaron a tomar todas estas medidas cuando se dieron condiciones más favorables para llevarlas a cabo? Hace quince años el país tenía un mayor PIB, un menor endeudamiento, un menor déficit fiscal y un mayor apoyo de organismos internacionales, por la credibilidad que se había ganado con el fin de la guerra mediante la vía negociada.

Este modelo económico privilegia lo económico y, se cree, su prosperidad rebalsará sobre lo social. Sin embargo, ambas realidades no pueden concebirse por separado. Primar lo económico por sobre lo social no se traduce en desarrollo humano; y primar lo social sin fundamentarse en la productividad económica, corre el riesgo de no ser más que una mera táctica electorera.

Entonces, volvemos a preguntarnos ¿qué hacer? Nuestra situación es de tal complejidad que vuelve inexorable la confluencia de todos los grupos que integran la sociedad. Se trata de construir el país que queremos todos, en el que todos tengamos lugar, y esto no es cuestión exclusiva de un grupo determinado. Hay que comenzar a reconstruir el tejido social entre todos, hay que reconstruir la organización social, los gremios y sindicatos, hay que consensuar con los empresarios que tienen una visión empresarial en consonancia con el bien de la sociedad.

Enero 2008.